



EXPEDIENTE: 683/2020
TERCERA SALA UNITARIA

Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

ACTORA: [REDACTED]

DEMANDADOS: SECRETARÍA DEL TRANSPORTE DEL
ESTADO DE JALISCO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL
ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA, JALISCO

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO
DE ZAPOPAN, JALISCO

SECRETARÍA DE LA HACIENDA
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTRADO: JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

SECRETARIO: JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN

Guadalajara, Jalisco, 30 treinta de septiembre de 2020 dos mil veinte.

V I S T O S para resolver en **Sentencia Definitiva** los autos del Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, promovido por [REDACTED] por conducto de su Administrador Único [REDACTED] en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO,** así como de la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,** y;

R E S U L T A N D O

Página 1 de 16

Jesús García 2427 / C.P. 44657 / Guadalajara, Jal. / Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org

1. Mediante escrito presentado el 21 veintiuno de febrero de 2020 dos mil veinte, a través de la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito por [REDACTED] Administrador único de la Persona Jurídica denominada [REDACTED] carácter que acreditó con las copias certificadas de la escritura pública número 10,938 diez mil novecientos treinta y ocho, pasada ante la fe del Notario Público número 34 treinta y cuatro en Zapopan, Jalisco, a través del cual promovió Juicio en Materia Administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se desprendieron.

2. Por auto de 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte, se admitió la demanda, teniéndose como autoridades demandadas a la Secretaría del Transporte, Secretaría de Seguridad, Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, así como de la Secretaría de la Hacienda Pública; y como actos administrativos impugnados las cédulas de notificación de infracción folios **113|302067635 y 113|293411760**, emitidas por personal de la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad, así como la cédula de notificación de infracción folio **113|7593837**, elaborada por personal de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como la cédula de notificación de infracción folio **123|7619230**, elaborada por personal de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan.

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas las documentales, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los documentos anexos a la misma se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación produjeran contestación a la demanda, ofrecieran y exhibieran pruebas con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se les tendrían como ciertos los hechos que no fueran contestados salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados.

También se requirió a la Secretaría del Transporte, Secretaría de Seguridad, Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara y Jalisco, Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, para que al momento de producir contestación a la demanda, exhibieran copias certificadas de los actos controvertidos, apercibidas que en caso de no hacerlo así, se les aplicaría



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

cualquiera de las medidas de apremio de las previstas en el artículo 10, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; sin perjuicio de tener por ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con esos documentos; sin que al efecto hayan cumplido con dicha determinación, razón por la cual en proveído de 21 veintiuno de septiembre de 2020 dos mil veinte, se dio cuenta que no cumplieron con dicho requerimiento, en consecuencia se les hizo efectivo el citado apercibimiento y se **presumieron como ciertos los hechos** que la parte actora pretende acreditar con las documentales consistentes en las copias certificadas de las cédulas de notificación de infracción controvertidas, salvo disposición en contrario; tal como se desprende de las actuaciones que se encuentran glosadas a las presentes actuaciones (fojas 62 y 63).

3. Con fecha 21 veintiuno de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo a la Directora de lo contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, a la Directora de lo Jurídico Contencioso del Municipio de Guadalajara, Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad, así como al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, quienes comparecieron en representación y sustitución de las autoridades demandadas – Secretaría de la Hacienda Pública, Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Secretaría de Seguridad y Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan-, produciendo contestación a la demanda entablada en su contra, por opuestas las excepciones y defensas que de su escrito se desprendieron, se admitieron las pruebas ofrecidas por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, teniéndose por desahogadas, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples de los escritos de contestación a la demanda se ordenó correr traslado al actor para que se imponga de sus contenidos.

Por otro lado, se tuvo al representante legal de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, exhibiendo la copia certificada del acta de notificación de infracción folio **064868**, correspondiente al folio **123|7619230**.

Asimismo, se dio cuenta que la autoridad demandada –Secretaría del Transporte-, fue omisa en producir contestación a la demanda entablada en su contra, dentro del término que para tal efecto le fue concedido, razón por la cual se le hicieron efectivos los apercibimientos contenidos en el acuerdo de radicación de demanda, por lo que se le declaró la correspondiente rebeldía, teniéndole como ciertos los hechos que le fueron imputados por el actor de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados, así mismo se le declaró por perdido el derecho a rendir pruebas.

Por lo anterior y en razón de que las pruebas admitidas, se habían desahogado en su totalidad, y que lo controvertido involucra cuestiones puramente de derecho, se otorgó a las partes un término común de tres días a fin de que formularan alegatos, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, se les tendría por perdido el derecho en ese sentido y se turnarían los autos para que se dictara la sentencia definitiva que en derecho correspondiera.

4. Sin que al efecto las partes hubieran comparecido a expresar alegatos dentro del término que para tal efecto les fue concedido, en el último párrafo del acuerdo establecido en el punto que antecede, en consecuencia se les hacen efectivos los apercibimientos contenidos en el párrafo que antecede y se les **declara** por perdido el derecho a rendir alegatos, ordenándose turnar los autos para que se dictara la Sentencia Definitiva que en derecho correspondiera, la cual hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 4, 5 y 10, y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra debidamente acreditada en actuaciones con las documentales que obran agregadas a fojas 9 y 60, a las que se les otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 48¹, 57² y 58³ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los

¹ Artículo 48. En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la moral y al derecho; y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo. Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de citación para sentencia. En este caso, la Sala ordenará dar vista a la contraparte para que en el término de cinco días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su admisión y valoración hasta la sentencia definitiva.

² Artículo 57. El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, se regirá por las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

³ Artículo 58. La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.



diversos numerales 399⁴ y 400⁵ del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia.

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciera valer la accionante en su escrito inicial de demanda, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la siguiente Jurisprudencia:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. *De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”* (Novena Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de

⁴ Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.

⁵ Artículo 400.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.

Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. Página: 830.)

IV. Antes de entrar al estudio de los conceptos de nulidad realizados por la parte actora, en primer término y por ser de orden público se estudia la causal de improcedencia, promovida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad, en su escrito de contestación a la demanda, prevista por el artículo 29, fracción IX, en relación con el numeral 3 fracción II, inciso a) y el numeral 30, fracción I⁶ de la Ley de Justicia Administrativa que literalmente establece:

“Artículo 29.- Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:

XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.”

Refiere el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad, que no le reviste el carácter de autoridad demandada, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3, fracción II, inciso a), de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en el cual se establece que es autoridad demandada la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la resolución o tramite el procedimiento impugnado o que la sustituya legalmente, y en la especie el referido, no dictó, ni ordenó, ni ejecutó, ni trato de ejecutar los actos impugnados, tal y como se desprende de los folios de foto infracción 302067635 y 293411760, señalado en la propia demanda como acto reclamado.

Al respecto, se **desestima** la causal de improcedencia aducida, lo anterior toda vez que, mediante publicación realizada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, de fecha 31 treinta y uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve se publicó el acuerdo DIGELAG ACU 063/2019, expedido por el GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, que contiene el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con el cual se le dio el carácter de autoridad al asumir funciones hasta entonces encomendadas a la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por el inciso a), fracción II, del artículo 3⁷, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

⁶ Artículo 30. *Procede el sobreseimiento del juicio:*

I. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

⁷ *Ibid.*



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

“Sexto. Los asuntos que se encuentran en trámite en la fecha en que entre en vigor este Reglamento serán turnados a la unidad administrativa a la que corresponda, según la nueva determinación de competencias, de conformidad con el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos serán distribuidos por el Secretario de acuerdo al ámbito de facultades que a cada unidad administrativa le corresponda.”

Expuesto lo anterior, se da cuenta que no se aprecia la existencia de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, por lo cual, es posible realizar el estudio de los conceptos de nulidad que hace valer la parte actora.

V. Resultan procedentes los conceptos de impugnación expresados por la parte actora [REDACTED] por conducto de su Administrador Único [REDACTED] contenidos en su escrito inicial de demanda, por lo que de conformidad a lo dispuesto por la fracción II de los artículos 74⁸ y 75⁹ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se actualiza la **nulidad** de las cédulas de notificación de infracción folios **113|302067635 y 113|293411760**, emitidas por personal de la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad, así como la cédula de notificación de infracción folio **113|7593837**, elaborada por personal de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como del acta de notificación de infracción folio **064868**, correspondiente al folio **123|7619230**, elaborada por personal de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, impuestas al vehículo con placas de circulación [REDACTED]

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la normatividad invocada en el párrafo que antecede, se procede al examen de las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones combatidas y más benéfica para la parte actora, atento al citado dispositivo legal así como a la tesis que aquí se inserta:

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE

⁸“Artículo 74. La sentencia definitiva podrá:

I. Reconocer la validez de la resolución o del acto impugnado;
Declarar la nulidad de la resolución o acto combatido;”

⁹“Artículo 75. Serán causas de anulación de una resolución, de un acto o de un procedimiento administrativo:

I. ...

II. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o se dejaron de aplicar las debidas

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. *En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos."(Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Abril 2007. Tesis: VIII.1o.86 A. Página: 1828.)*

En atención a los numerales y Jurisprudencia señalada, de la lectura integral que se hace del apartado relativo a los actos administrativos que se impugnan que vierte en su escrito de inicial de demanda, mediante el cual, medularmente señala que los actos combatidos no le fueron debidamente notificados, por el que considera que deberá declararse la nulidad de las mismas.

Al manifestarse a lo anterior la Directora de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, quien compareció en representación y sustitución de la autoridad demandada -Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco-, en su escrito de contestación de demanda, sostiene que resulta inoperante por infundado el señalamiento que hace valer el accionante, toda vez que el



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

acto impugnado se encuentra suficiente y debidamente fundado y motivado, así mismo cumple con los requisitos de validez, pues de manera clara y precisa se señalan las circunstancias de modo tiempo y lugar, el nombre y la firma del vigilante, así como el motivo de la sanción y es suscrito por el vigilante adscrito a la Unidad Departamental de Estacionamientos, esto es por ubicarse en la hipótesis contenida en la fracción I, del artículo 73 del Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Guadalajara.

Por su parte, el Director General Jurídico, Representante Legal de la autoridad demandada -Secretaría de Seguridad-, en su escrito de contestación de demanda, manifiesta que de las cédulas de notificación de infracción se desprende que los conceptos devienen por motivo de la aplicación de sanciones por comisión de infracciones (FOTOINFRACCIONES) anteriores al 19 de octubre de 2019, actos que tampoco le competen al suscrito, puesto que tal función la realizó la Secretaría del Transporte, ya que sus facultades se establecieron oportunamente en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; por lo que resulta evidente que si el promovente es sorprendido violentando la Ley, este puede ser sancionado en los términos de la misma.

Luego el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, quien compareció en representación y sustitución de la autoridad demandada, -Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan-, en su escrito de contestación de demanda, señala que se reserva el pronunciamiento relativo a la legalidad de dicha acta, hasta el momento de producir contestación a la ampliación de demanda.

Sin que a lo anterior la diversa autoridad demandada -Secretaría del Transporte -, haya emitido pronunciamiento alguno, toda vez que en actuación de 21 veintiuno de septiembre del presente año, se le declaró la correspondiente rebeldía, en tal virtud se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo admisorio, teniendo como ciertos los hechos que le fueron imputados de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados, así mismo se les declaró por perdido el derecho a ofrecer pruebas, tal como se desprende de las actuaciones que obran a fojas 61, 62 y 63.

En ese tenor, derivado de los argumentos establecidos en párrafos anteriores, se considera que le asiste la razón al accionante cuando refiere que las cédulas de notificación de infracción impugnadas, violentan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no le fueron notificadas, no obstante que la autoridad emisora se encuentra obligada a ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 377, así como por la fracción III, del artículo 378, del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los cuales se establece que en caso de que el conductor no se

encuentre en el lugar del vehículo, el agente vial procederá a elaborar la cédula de notificación correspondiente y la dejará en un lugar visible y seguro del vehículo, con independencia de los motivos que hayan generado el levantamiento de la misma, así como aquella que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en la cédula de notificación de infracción, así como que la misma deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores a su levantamiento, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado.

También se precisa en el dispositivo legal citado en último lugar, que en el caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo reciba o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello; es necesario precisar que la parte actora en su escrito inicial de demanda, manifestó desconocer el contenido de los actos combatidos, por lo que se requirió a las autoridades demandadas para que remitieran las copias certificadas, sin embargo en auto de 21 veintiuno de septiembre de 2020 dos mil veinte, se dio cuenta que la Secretaría del Transporte, la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, no remitieron las copias certificadas de las cédulas de notificación de infracción combatidas, motivo por el cual se les tuvieron como ciertos los hechos que la parte demandante pretende acreditar con esas documentales; quedando de manifiesto que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, al no haber sido legal y debidamente notificadas, toda vez que constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración pública, por lo que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad y seguridad jurídica resguardadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia **declarar la nulidad** de las cédulas de notificación de infracción combatidas, sustenta lo anterior el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. *La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades,*



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

De igual forma es aplicable la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Página: 2645, registro electrónico 160591, que dice:

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.

Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación

a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Así entonces, aun cuando se trata de una omisión formal, debe declararse la nulidad lisa y llana, en virtud de que la ausencia de notificar personalmente al actor, no es sujeta de redimirse, ya que los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos impugnados ocurrieron en forma accidental con anterioridad, de manera que no pueden reincorporarse a la actualidad y por tanto, tampoco pueden servir de base para imponer nuevamente la sanción, dada la imposibilidad física y material de repetir esos sucesos y notificarlos de manera personal al infractor.

Por otro lado, se procede al estudio del agravio que expresa la parte accionante, en el que refiere que la cédula de notificación de infracción que se analiza visible a foja 60, de actuaciones se encuentra indebidamente motivada, según los requisitos a que alude el artículo 13, fracción III, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, que para mayor ilustración se transcribe:

“Artículo 13. *Son requisitos de validez del acto administrativo:*

I. *Constar por escrito;*

II. *Contener la mención del lugar, fecha y autoridad que lo suscribe;*

III. ***Estar debidamente fundado y motivado;***

IV. *Contener la manifestación clara y precisa del objeto del acto;*

V. *Contener la referencia específica de identificación del expediente que se trate y nombre completo del o los interesados;*

VI. *Ser notificado apegándose a los ordenamientos en vigor aplicables y en su caso publicado. Igualmente deberá mencionar los recursos administrativos que puede interponer su destinatario en caso de desacuerdo;*

VII. *Dar intervención a terceros interesados cuando el ordenamiento de la materia así lo establezca; y*



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

VIII. *Ser efectuado por el servidor público facultado para ello.*"

Del citado artículo se colige que el acto administrativo impugnado debe estar debidamente fundado y motivado, sin embargo, del contenido de la cédula de notificación de infracción impugnada se advierte que en el apartado relativo al "*Motivo de la sanción*" (*sic*), las autoridades demandadas únicamente asentaron lo siguiente, "*Consultar el numeral de infracción al reverso y los montos de la sanción*", sin establecer un relación causal entre el citado artículo y la conducta desplegada por la parte actora, esto es, sin especificar cómo arribó a concluir que el vehículo de la parte accionante se encontraba estacionado en un área prohibida por la autoridad legalmente competente, quedando de manifiesto para esta autoridad que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, contraviniendo lo previsto por la fracción III, del artículo 13, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En ese orden de ideas, se concluye que la autoridad demandada, no aportó la certeza jurídica al particular; violentándose con ello las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14¹⁰ y 16¹¹ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales exigen que en todo acto de autoridad se señale con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo emita, así como las normas aplicables al caso concreto en el que apoyan su actuar, atento a la exigencia constitucional de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos de autoridad que afectan o lesionan su interés jurídico, lo que trae como consecuencia **declarar la nulidad** del acta de notificación de infracción folio **064868**, correspondiente al folio **123|7619230**, toda vez que en la misma se dejaron de aplicar las debidas disposiciones legales, actualizándose la causal de anulación prevista por el artículo 75 fracción II de la Ley adjetiva de la materia.

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la

¹⁰ Artículo 14. *A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.*

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho."

¹¹ "Artículo 16. *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."*

norma legal invocada como fundamento.”(Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Marzo 1996. Tesis: VI.2o. J/43. Página: 769.)

Bajo las argumentaciones vertidas, se considera innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de anulación y pruebas aportadas al sumario que hacen valer las partes, porque su estudio sería innecesario al no influir en la variación del sentido de esta resolución, en términos del criterio Jurisprudencial que dice:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de los restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido del fallo.” (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV. Mayo de 2007. Tesis: IV.2º.C.J/9. Página: 1743).

Por otro lado, respecto a la diversa autoridad demandada Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, quien hoy resuelve advierte que no se ubica en el supuesto previsto por el artículo 3 fracción II inciso a) de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 29 fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación al diverso 30 fracción I, de la Ley en cita, toda vez que de autos no se advierte que haya emitido dichos actos, tal como lo menciono en su contestación de demanda vertida que obra a fojas 36 a 40 de autos.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. [REDACTED] por conducto de su Administrador Único [REDACTED], parte actora en el presente juicio, **desvirtuaron parcialmente** la legalidad de los actos administrativos impugnados.

SEGUNDO. Se declara el sobreseimiento respecto a la autoridad demandada Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por actualizarse la hipótesis prevista, por lo artículos 29 fracción VI y 30 fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

TERCERO. Se **declara** la **nulidad** de las cédulas de notificación de infracción folios **113|302067635** y **113|293411760**, emitidas por personal de la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad, así como la cédula de notificación de infracción folio **113|7593837**, elaborada por personal de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como del acta de notificación de infracción folio **064868**, correspondiente al folio **123|7619230**, elaborada por personal de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, impuestas al vehículo con placas de circulación [REDACTED], por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando del cuerpo de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió el Magistrado JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, Presidente de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco actuando ante la presencia del Secretario de Sala JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN, quien autoriza y da fe.

EL MAGISTRADO PRESIDENTE

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

EL SECRETARIO DE LA SALA

JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN

JLGM/JFCG/cnrg.

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”.